

Más ciudadanía es menos corrupción

Brian Alvarado Pino

Sumilla

La política no es exclusiva de los políticos profesionales y sus partidos. La política también nos pertenece a los ciudadanos y ciudadanas del común, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los días por diferentes causas. Entender eso es el primer paso para desterrar la corrupción del Estado y fortalecer, al mismo tiempo, el sistema democrático. Así pues, apropiándonos de los espacios públicos y de los lugares donde se toman las decisiones es que encontraremos soluciones a nuestros problemas como sociedad.

Este artículo trata de llamar la atención sobre la necesidad y el deber que tiene la ciudadanía de tomar su lugar en la política, en las discusiones públicas y, sobre todo, de ejercer el derecho que tiene de control social sobre el Estado y sus funcionarios, para así obstaculizar el ascenso de la corrupción como forma subterránea y aceptada de hacer política y de construir Estado.

Asimismo, este texto retrata brevemente el panorama de insatisfacción generalizada que existe en América Latina frente a la democracia y el desempeño de sus gobiernos, y cómo dicha insatisfacción, que conlleva al descontento y descreimiento de la política y el sistema democrático, es un terreno fértil para las prácticas corruptas de la clase dirigente. Es así que se llama a tomarse en serio el control social como vía fundamental para que la corrupción sea detenida, o por lo menos sea cada vez más difícil ser practicada.

Finalmente, se destacan en el artículo las muchas formas de veedurías y control ciudadano que existen en la región y cómo una nueva iniciativa continental, llamada Foro Ciudadano de las Américas, ha emergido para contribuir a la tarea de fortalecer el papel de la ciudadanía en la política y en lo público.

LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE se ha vuelto tan común que ya ni sorprende cuando vemos por televisión, leemos en periódicos u oímos en radio que un funcionario o político está siendo acusado de algún delito por, en resumidas cuentas, robarse el presupuesto público o facilitarle a otras personas el hacerlo. Es común que entre nuestros conocidos, amigos y familiares se oiga la frase «todos roban» o «político que no roba no es político». Son frases desalentadoras y a la vez son el caldo de cultivo para que la clase política corrupta sienta menos miedo de serlo, porque de alguna u otra forma se lo permitimos con nuestra pasividad o conformidad. Esto también es dañino para la política misma, para la democracia y para el fortalecimiento del Estado de derecho.

También es cierto que esta actitud ciudadana frente a la política muestra un agotamiento crónico e insatisfacción, tal como lo indica el último informe del Latinobarómetro 2018: «Hoy sólo nuevamente estamos constatando los síntomas de una enfermedad, la diabetes democrática, cuya crónica no sólo fue anunciada sino que lamentablemente continúa su escritura»¹.

Hay un pesimismo frente a nuestras débiles democracias que no necesariamente se está encausando en acciones concretas para

¹ Corporación Latinobarómetro. *Informe Latinobarómetro 2018*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2018. Ver en: bit.ly/2NCxiEc

detener su deterioro, sino más bien en su agrietamiento. A esto se le suma la corrupción, que mientras más extendida, ahonda más aún en el resquebrajamiento institucional. Claro, no debe desconocerse que han surgido alternativas políticas que denuncian y combaten la corrupción, al igual que movimientos ciudadanos que reivindican sus derechos y el control social. Dos ejemplos de esto son los hechos ocurridos en Guatemala en el año 2015, cuando miles de personas presionaron tanto que lograron la renuncia del presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, acusado de graves hechos de corrupción; y lo acontecido en Ecuador y Bolivia a principios de este siglo que, también a través de manifestaciones ciudadanas y protestas en las calles, lograron derrocar gobiernos ineficientes en la satisfacción de sus necesidades.

Entonces se hace necesario reconocer que, a pesar de ese pesimismo y descreimiento de la democracia y sus instituciones, y de la corrupción que parece abarcarlo todo, todavía hay cierta esperanza, o quizá rabia acumulada, que hacen que de vez en cuando surjan manifestaciones que sacuden nuestro cotidiano y nos despierten del letargo en el que estamos atrapados.

Los ejemplos más recientes los encontramos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela, países con distintas realidades políticas y sociales en los que hay una cosa en común: desidia estatal frente a la materialización de derechos y signos de corrupción palpables. En algunos países más que en otros. Y, sobre todo, descontento ciudadano frente al papel de los gobiernos.

Casi como efecto espejo, desde 2010 aumenta de manera sistemática aquellos ciudadanos que se declaran 'indiferentes' al tipo de régimen aumentando de 16% en 2010 a 28% en 2018. Esta lejanía del tipo de régimen va acompañada con un alejamiento de la política, de no identificación en la escala izquierda - derecha, de la disminución de los que votan por partidos, y finalmente en la propia acción de ejercer el derecho a voto. Se trata de un conjunto de ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en su

individualismo, rechazan lo establecido y rompen los esquemas. Son ciudadanos más bien desencantados y frustrados. Este contingente de desafectados de los gobiernos, las ideologías y la democracia son la fuente mayor en el surgimiento de populismos en la región, no son una novedad y hace años que se observa su crecimiento².

Es así como quedarnos en el descontento frente al Estado y su (débil) democracia, o conformarnos con que la corrupción es intrínseca a la política, es entregarle la política misma a la delincuencia, a quienes se roban el dinero de la educación, de la salud, de la infraestructura. A quienes se roban nuestros derechos.

Cierto también es que no es un problema que vamos a resolver de la noche a la mañana. Erradicar la corrupción no puede verse como una utopía ni tampoco como algo meramente discursivo. Erradicar la corrupción no es una tarea exclusiva de los partidos políticos o del Gobierno. Erradicar la corrupción también es una responsabilidad de la ciudadanía. Cuando nos tomamos en serio la labor de ser ciudadanos y ciudadanas, más allá de ir a votar o pagar impuestos, la corrupción tiene menos probabilidades de ocurrir porque tiene más ojos que vigilan.

El último informe del Barómetro Global de la Corrupción 2019, realizado por Transparencia Internacional, encuentra que:

Son fundamentales varios requisitos básicos para reducir la prevalencia de la corrupción: asegurar que las personas puedan denunciar de manera segura los casos de corrupción, garantizar que se impongan sanciones a todos por igual, posibilitar que las ONG puedan operar con libertad y empoderar a los ciudadanos para exigirles a los Gobiernos que rindan cuentas. (...). Si bien existen obstáculos a tales esfuerzos contra la corrupción en la región, muchas personas están preparadas y dispuestas a tomar medidas³.

² Corporación Latinobarómetro. *Informe Latinobarómetro 2018*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2018. Ver en: bit.ly/2NCxiEc

³ Pring, Coralie y Vrushi, Jon. *Barómetro Global de la Corrupción 2019*. Berlín: Transparencia Internacional, 2019. Ver en: bit.ly/2qkZK5x

El robo de los derechos y la democracia

La corrupción no solo se trata de dinero, es mucho más que eso. Cuando los corruptos asaltan los presupuestos públicos en favor de sus intereses y en detrimento de la ciudadanía, nos están robando nuestros derechos y están asaltando a la democracia.

El Estado de derecho existe como pacto social que nos permite, en teoría, vivir mejor, tener bienestar y protección, pero, sobre todo, ejercer y materializar nuestros derechos. El Estado y su sistema democrático es posible no solo gracias a la voluntad política y social, sino también gracias a los aportes (impuestos) que todos y todas hacemos directamente desde nuestros bolsillos a las arcas públicas. En pocas palabras, la corrupción asalta nuestras propias casas.

Sin embargo, en muchos países son pocos los mecanismos de participación ciudadana que existen, y donde los hay, son pocas las personas que saben de estos o, como veíamos anteriormente, debido al desencanto por la democracia, no les interesa hacer uso de ellos.

Lo anterior redundará en más corrupción, al no existir la vigilancia necesaria, y, a su vez, en un mayor detrimento de la calidad de vida de las personas.

Al respecto, Carola Pessino y Juan Carlos Benítez, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirman:

La corrupción importa. Las compras públicas son, en su estado actual, una ventana abierta a la corrupción que cuesta a la región en torno a 1.4% del PIB regional; y esto ocurre principalmente con la obra pública. La metodología de cuantificación extrapoló los datos de ineficiencia y corrupción en países de la Unión Europea. Para ALC, se utiliza el umbral más bajo de los datos de la Unión Europea y se corrigen por intensidad de la corrupción⁴.

⁴ Ver: Pessino, Carola y Benítez, Juan Carlos. «Hacia un gasto inteligente para América Latina y el Caribe». *blogs.iadb.org*, New York, 1 de febrero del 2019. En: bit.ly/32jAb1T

Es decir, cerca de 220 mil millones de dólares se pierden entre la ineficiencia del gasto y la corrupción, dice el mismo BID.

Acá tenemos, por supuesto, una de las causas más nítidas del desencanto que siente la mayoría de ciudadanos y ciudadanas por el sistema actual. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, los países de América Latina y el Caribe siguen ocupando los peores puestos en el *ranking*. Esto significa dos cosas muy graves: una gran debilidad de las instituciones y de la democracia, y una constante vulneración a los derechos.

Pensemos, entonces, ¿qué habríamos hecho en nuestros países con esa cantidad de dinero que se roban?, ¿cuántos hospitales se dejaron de construir?, ¿a cuánta gente se dejó de atender?, ¿cuántas escuelas y universidades públicas han dejado de recibir lo suficiente para brindar educación de calidad? En fin, son muchas las políticas públicas y sociales que dejan de fortalecerse por este desangre presupuestal.

El análisis cruzado del IPC con los datos relativos a la democracia desvela una relación directa entre la corrupción y la salud democrática global. Las democracias caracterizadas como ‘plenas’ obtienen en promedio 75 puntos en el IPC; las etiquetadas como ‘débiles’ una media de 49 puntos; los denominados ‘regímenes híbridos’ (que presentan elementos propios de los sistemas autocráticos), 35 puntos de media; y los regímenes autocráticos son los que obtienen peores resultados, con 30 puntos de media⁵.

Y no solo es una percepción, también es una realidad palpable; tanto como las brechas sociales y la desigualdad que existen en nuestros países, pese a que en la primera década del siglo XXI hubo una disminución de estas, como lo demuestran los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

⁵ Ver: Transparencia Internacional. *Índice de percepción de la corrupción 2018*. Berlín: Transparencia Internacional, 2019. En: bit.ly/2PHRVBH

Sin embargo, ya en esta segunda década las cifras de pobreza han venido creciendo. El 2017, 30.2% de la población de la región, eso es alrededor de 184 millones de personas, vivía en condiciones de pobreza, y un 10.2%, es decir unos 62 millones de personas, estaban en condiciones de pobreza extrema, el porcentaje más alto desde el 2008.

Dichas cifras no solo preocupan a analistas económicos y expertos en la materia de los organismos multilaterales, como el BID o el Banco Mundial, sino también a organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el 2018 la CIDH decidió trabajar en el tema y llamar la atención sobre la gravedad y los efectos de la corrupción en los derechos humanos. Es así como surge la Resolución 1/18, donde se menciona que la corrupción «(...) debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad»⁶.

Después de varias consultas, de revisar documentos, peticiones y quejas de varias organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores en el continente, la CIDH decidió tomar cartas en el asunto. Su diagnóstico y sus preocupaciones son alarmantes cuando se miran con su enfoque.

La corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en particular de las poblaciones y grupos en condición de más vulnerabilidad. Entre estos grupos, las mujeres, los líderes sociales, defensores del derecho a la tierra, pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas son los más afectados. Asimismo, el impacto de la corrupción es muy grave en la garantía de los derechos de

⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). *Resolución 1/18. Corrupción y derechos humanos*. Bogotá: Organización de los Estados Americanos (OEA), 2018. Ver en: bit.ly/2NhnYqm

las personas privadas de libertad, en las personas migrantes, y en personas LGBTI⁷.

En conclusión, la corrupción no se trata solo de desangrar los presupuestos de las entidades públicas, sino de lesionar nuestra ciudadanía. Cada centavo que se roban es una oportunidad menos para consolidar la democracia y el Estado de derecho.

No se trata, pues, de solo formular e implementar políticas públicas a partir de análisis de nuestras necesidades como sociedades, sino de cuidar y garantizar que los recursos públicos destinados a su ejecución no sean asaltados ni, mucho menos, que justifiquemos a quienes nos roban «porque por lo menos hacen algo», no. Los políticos no nos hacen favores. Son ellos nuestros empleados y los encargados de materializar ese contrato social llamado Estado de derecho.

Iniciativas ciudadanas contra la corrupción

Frente a este panorama, no basta solo con denunciar, hay que actuar, hay que poner en perspectiva y encausar nuestro desencanto por la democracia de forma propositiva y desde la acción.

Son muchas las iniciativas ciudadanas que existen a lo largo del continente. Unas con más éxito que otras, pero con la convicción de que hay que hacer algo. Paradójicamente, lo que hace falta en esta lucha contra la corrupción y en defensa de nuestros derechos es dinero. No obstante, a través de redes de trabajo e intercambio de conocimientos y experiencias, tenemos varios ejemplos potentes que han puesto sobre las cuerdas a los corruptos.

Desde las organizaciones de la sociedad civil sabemos que una de las maneras más contundentes para hacerle frente a este flagelo es fortalecer nuestras propias capacidades y apropiarnos

⁷ CIDH. *Resolución 1/18. Corrupción y derechos humanos*. Bogotá: OEA, 2018. Ver en: bit.ly/2NhnYqm

de los pocos, o muchos, mecanismos de participación ciudadana y control social que existen.

Por ejemplo, en muchos países de nuestra región ya hay leyes sobre acceso a la información pública a partir de la ley modelo interamericana del 2009. Un instrumento que permite hacer control ciudadano sobre las acciones que despliega el Estado a través de sus políticas.

Asimismo, existen cientos y cientos de veedurías ciudadanas que vigilan la ejecución de los presupuestos públicos, así como observatorios y centros de investigación sobre la corrupción. En fin, son muchas las iniciativas ciudadanas que por medio de su quehacer empoderan a la ciudadanía latinoamericana para tomar más en serio esta lucha.

Recientemente ha surgido un espacio en el concierto interamericano que recoge más de una veintena de organizaciones de toda América Latina, conectada en red a más de 500 dirigentes y dirigentas, así como a otros actores sociales de la región.

Hacia el 2017 surgió el llamado Foro Ciudadano de las Américas, un espacio de la sociedad civil del cual hacen parte **desco** - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, y el Grupo Propuesta Ciudadana, ambos del Perú. Nace a instancias del sistema de Cumbre de las Américas y de las Asambleas Generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para potenciar la voz de las organizaciones y su incidencia.

Una de sus tareas ha sido la de hacer un seguimiento riguroso y juicioso del cumplimiento de los compromisos y mandatos que los Estados miembros de la OEA adquieren en el marco de las mencionadas reuniones. Esta tarea ha sido compleja pues en la práctica son muchas las promesas que han quedado en el papel, volviéndose los compromisos y mandatos simples saludos a la bandera, lo que dice mucho del estado de nuestras democracias.

A partir de la Cumbre de Perú el 2018, el tema de la corrupción ha sido un recurrente, tanto que a partir del 2019 el Foro Ciudadano

de las Américas se está dando a la tarea de llamar a organizaciones expertas en la materia para construir un observatorio ciudadano a nivel regional que se ocupe de abordar dicho flagelo.

Como sociedad civil organizada es nuestro deber construir más ciudadanía, esto es concienciar sobre las herramientas de las que disponemos para hacer control social al Estado, de la mano, por ejemplo, del periodismo, para así disminuir la posibilidad de ocurrencia de la corrupción.

Por ello invitamos a todas las personas a unirse a cualquier iniciativa ciudadana, no importa su tamaño o su alcance; puede ser desde una veeduría que vigile el gasto público en sus barrios, hasta una que cuide de los recursos públicos de los proyectos de la ciudad en la que se vive. Cualquier acción ciudadana ayuda a que le cerremos el paso a quienes pretenden robarnos nuestros derechos.